

Conjeturas políticas sobre la Argentina post-Malvinas

Oscar Landi

Presentación

El arte del análisis de coyunturas reside en la capacidad de discriminar y de valorar acertadamente las relaciones que guardan, en un momento dado, los acontecimientos singulares con las tendencias sociales y políticas más generales del país. Supone identificar las diferentes formas de intervención que tienen los hechos puntuales en las relaciones de fuerzas e, incluso, en la misma formación histórica de los actores sociales y políticos.

Los procesos de formación del poder en la Argentina de hoy conforman un tejido por demás lábil, abierto a inesperadas alternativas. La fragmentación propia de la crisis, la lógica eminentemente sectorial y cortoplacista de los comportamientos, la superposición de los tiempos propios con que cada actor toma sus decisiones, cargan de profunda incertidumbre las expectativas de los argentinos.

Estas circunstancias, sumadas a las limitaciones del autor, hacen que las líneas que siguen no se arriesguen a quedar eventualmente desairadas por imprevisibles giros de la situación o por la valorización o desvalorización brusca de algún acontecimiento. Por ello, no nos proponemos presentar aquí un análisis teóricamente ortodoxo de coyuntura, sino algunas notas, a modo de insumo, para una necesaria discusión sobre la grave situación actual de la Argentina.

El diagnóstico de 1976

El gobierno de las fuerzas armadas inaugurado en 1976 expresó reiteradamente su intención fundacional respecto al país: se trataba de cerrar un ciclo histórico inaugurado con la emergencia del peronismo en la dé-

cada de 1940 y de abrir uno nuevo. La crisis política de la primera mitad de la década de los años setenta había sido percibida por las fuerzas armadas y por importantes sectores del empresariado como una amenaza de disolución del orden social. En estos sectores se extendió entonces la idea de que era el tipo de régimen político vigente el que posibilitaba la influencia dominante del peronismo y de los intereses que éste convocaba.

El neoconservadurismo complementó el diagnóstico. El equipo que tuvo a su cargo la gestión económica de 1976 a 1981 se esforzó en demostrar a las fuerzas armadas que el esquema político-institucional que querían remplazar estaba estrechamente ligado al ordenamiento económico y a la morfología social que le daba sustento. En consecuencia, la reforma económica era una condición necesaria de la reforma política que se proponía el gobierno.¹ En el marco del auge de las teorías neoliberales en el plano internacional, este grupo construyó una interpretación de la crisis política de 1976. La caída del gobierno de Isabel Perón era, desde su óptica, el último e inevitable acto de un proceso de plazo más largo, abierto en la década de 1940 con la emergencia histórica del peronismo y la constitución de un "Estado protector". Este proceso habría apartado el funcionamiento de la sociedad de las reglas del mercado, para estructurarlo en función de las relaciones entre el Estado y las corporaciones, principalmente las del movimiento obrero. Para este diagnóstico, la sociedad "enferma" de comienzos de 1976, que se debatía entre el "orden o el caos", era el producto inevitable del ciclo histórico populista que debía terminar para abrir paso a otro nuevo. Por ello el discurso oficial comenzó a hablar de objetivos y no de tiempos. Se trataba de remover a los que se caracterizaban como los factores constitutivos de la inestabilidad política, aunque no se fijasen plazos claros para la reinstitucionalización del país.

El plan económico que se puso en marcha, sobre todo a partir de los reajustes financieros que se le introdujeron en 1978, se presentó como una condición necesaria de la reforma política que proponía el gobierno. Se trataba no sólo del control de las magnitudes cuantitativas de las variables económicas, sino también de alterar la morfología económica y social del país populista que se heredaba. La problemática del "desarrollo" y del "crecimiento" fue cediendo paso a la del "reordenamiento" del país.²

¹ Al respecto véase de Adolfo Canitrot: "La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976", Estudios CEDES, vol. 2, Núm. 6, 1979.

² Cuando en cierta oportunidad se le preguntó a un funcionario del Ministerio de Economía si la política económica estaba condicionando el proceso político, respondió de modo transparente de la siguiente forma: "Yo creo que lo condiciona, porque con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político porque todo el poder lo tenían ellos. Ahora con un mercado laboral de movimiento, el trabajador no acude más al dirigente sindical por su problema, porque si no le gusta su empleo se va a otro y listo. Además hay salarios diferenciados por idoneidad, por apego al

El neoconservadurismo y las fuerzas armadas —o por lo menos su principal sector dirigente— convergieron en un diagnóstico que se vertebró en la opción “caos-orden”; convergencia que generó un reconocimiento entre pares, no tanto por profundas afinidades de tipo ideológico, sino por la eventual capacidad de ambos términos para gobernar, para reordenar bajo control a la sociedad. Convergencia de dos lógicas diferentes: la de una corporación, las fuerzas armadas, y la de élites políticas y técnicas impregnadas en un pensamiento anticorporativo. Se estableció una fórmula política en la que el pensamiento neoconservador debió manipular una laguna, una tensión en su argumento: reconocer a una corporación en el puesto de mando, por más que algunos de sus voceros explicaron el hecho como temporario y de transición. Pero esta laguna del argumento neoconservador ocultaba uno de los datos políticos más significativos de esa coyuntura. Las fuerzas armadas hicieron una implacable búsqueda de una nueva ubicación para sí mismas en el sistema institucional del país. Ello se expresó en la total prioridad que otorgaron a sus mecanismos decisivos internos, respecto a los restantes de las mismas instituciones estatales y de la sociedad civil. Así como en otras ocasiones históricas más de un político intentó hacer política *en* las fuerzas armadas, desde 1976 la sociedad toda fue enfocada por la política *de* las fuerzas armadas. Este proceso de redefinición de la identidad institucional de las fuerzas armadas encontró su referente doctrinario en las teorías de la seguridad nacional. Pero sus prácticas de gestación no fueron tanto actividades de adoctrinamiento (similares a las que llevaron en la década de 1960 a adquirir un papel importante al ISEB en Brasil o, con otra orientación, al CAEM en Perú) como la situación de guerra interna que asolaba a la Argentina.

La errática pero ofensiva búsqueda de reubicación institucional de las fuerzas armadas, puso algunos condicionamientos al plan económico, con vistas a mantener sus posibles costos sociales dentro de ciertos límites: el eventual aumento brusco de la desocupación (como ocurrió en Chile después de 1973) era valorado como un riesgo, como la creación de condiciones sociales para el resurgimiento de la guerrilla y del terrorismo de izquierda.

Además de estos aspectos, digamos tácticos, de regulación de la cadencia en la aplicación del plan económico, esa lógica de funcionamiento de la corporación militar incubaba serios problemas para una derecha económica y social que desde hacía largas décadas de vida nacional trataba de compensar su debilidad en el plano de los partidos políticos con cambiantes alianzas con sectores militares dispuestos a hacerse cargo del gobierno. La autonomía decisoria de la corporación militar llevaría, luego, a situaciones en que las tensiones incubadas en la convergencia entre las fuerzas armadas y el neoconservadurismo que dirigió la política económica se manifestarían en un primer plano.

trabajo. Estamos saliendo de la masificación y hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina” (Aleman, diario *La Prensa*, Buenos Aires, 23 de octubre de 1979).

Desde el punto de vista de la formación de una nueva hegemonía política, la naturaleza del diagnóstico que venimos describiendo hizo que se mantuviera por parte del Estado una actitud ambivalente respecto a la necesidad de mantener y ampliar el posible consenso con el que surgió. Si bien, como acabamos de señalar, desde algunas esferas se manifestó cierto cuidado en mantener dentro de ciertos límites los costos sociales del plan económico, sin embargo, desde el punto de vista del discurso político, fue valorado como más importante generar nuevos sistemas de reconocimiento intersubjetivo, nuevos principios de individuación políticos, que mantener o ganar el consenso de los actores sociales y políticos que se consideraban como propios del ciclo populista. Se trató no tanto de ganar su adhesión como de transformarlos.

Los dispositivos de resocialización política

A lo largo de toda una década, la escena política argentina fue dominada paulatinamente por el enfrentamiento armado, y el terrorismo de diferente signo político intervino día a día ensombreciendo el clima anímico y político del país. A partir de 1975, cuando el gobierno de Isabel Perón entró en una grave crisis y su vaciamiento de poder se fue agudizando vertiginosamente, el lenguaje de la política fue ejercido casi totalmente por el de las armas. Ello produjo una privatización creciente de la vida cotidiana y una redefinición de las relaciones entre los individuos y los centros de decisión públicos.

En este contexto, y a partir de 1976, se combinaron —y hasta se yuxtapusieron— diversos dispositivos oficiales de disciplinamiento y de resocialización política de los individuos. Dos de los más importantes —pero no únicos— fueron el mercado económico y los medios de comunicación de masas.

En el proyecto neoconservador el mercado apareció como bifronte: por un lado, era el elemento central de la política económica y, por otro lado, era un dispositivo dentro de la red de formación del poder. Desde el punto de vista histórico estábamos en presencia de una novedad. El mercado ya no era sólo la mano anónima que establecía leyes del juego iguales para todos y educaba a los hombres en la pedagogía del cálculo racional de costos y beneficios, tal como se había presentado en el pensamiento liberal de la época de emergencia de las relaciones de producción capitalistas. Desde 1976 se presentó como una pieza central del reordenamiento de la sociedad, luego de las denominadas crisis del “Estado protector” y de las democracias. En este punto coincidían las diferentes variantes internas del campo liberal conservador.

Para las recetas neoconservadoras, el mercado era un elemento central de las argumentaciones más matematizadas de las corrientes neoclásicas y era un principio fáctico que obraba dentro del proceso de formación de poder político. El mercado era polivalente, punto de condensación, cruce de factores, generador de funciones diferentes, todas orientadas a atender las urgencias y las amenazas que plantearía la crisis del "Estado protector". En la fórmula de poder ensayada desde 1976, el mercado cubrió funciones de dispositivo orientado a desarticular, a través de la competencia mutua, a los miembros de las corporaciones sindicales y de los partidos: centrifugaba en lo micro a los actores colectivos del régimen anterior. También disciplinaba y resocializaba a los individuos; generaba un nuevo sentido que debía penetrar en la sociedad para realizar el necesario "cambio de mentalidad" de los individuos; rebautizaba a los hombres, resignificaba sus identidades anteriores. Era un dispositivo para la necesaria "revolución cultural" que debía darse en occidente, tal como propuso Friedrich Hayek.

Como se ve, en el mercado estaban depositadas grandes esperanzas. Generaría la disolución de los anteriores sistemas de reconocimiento, que eran colectivos y no individuales y que se alimentaban de la temática de la "justicia social". Era un mecanismo macro, pero que se constituía de infinitas redes micro: allí donde se compraba o vendía algo. En la etapa previa a estas políticas, el mercado había llevado a lo micro el caos que imperaría en la escena política. Su efecto de demostración más abarcante, con más capacidad de filtrarse por todos los ámbitos, fue el desorden de los precios, la inflación. Además, el mercado singularizaba y privatizaba a los individuos. Trabajaba en el nivel fáctico. Su puesta en funcionamiento hacía más viable la des-socialización de la política y la des-politización de la sociedad. En aquella etapa de ordenamiento, ayudaba a que el poder se procesase bajo la forma de redes privadas de disciplinamiento.³ En fin, el mercado en tanto dispositivo de la genética de un nuevo individuo, era coherente con la visión pesimista que el neoconservadurismo tiene de las mayorías: éstas sólo responden a tratamientos fuertes, implacables, irreversibles. Tal como la anónima e invisible mano del mercado trata a los que se equivocan y a los ignorantes.

Así como el mercado pasó a ser un ingrediente fundamental de las nuevas estrategias discursivas oficiales, también el mismo circuito de la palabra pública sufrió significativas alteraciones. Ella se canalizó principalmente a través de los medios de comunicación, que ya no debieron competir con otras instancias de la comunicación social (partidos, sindicatos, prácticas culturales, etcétera), que antes funcionaban como espacios alternativos de comunicación, obviamente más atravesados por las variantes de cultura política que se daban en la sociedad.

El férreo control estatal de los medios que se ejerció entonces, se podría

³ Al respecto véase José Brunner: *Ideología, legitimación y disciplinamiento en la sociedad autoritaria*, FLACSO, Santiago, 1930 y Norbert Lechner: "Poder y orden", *Revista Mexicana de Sociología*, octubre-diciembre de 1978.

representar como una pirámide invertida: a mayor alcance, mayor control y censura.⁴

Simultáneamente, desde el punto de vista intradiscursivo, en la medida en que el discurso oficial suprimió de su vocabulario formas interpelativas a través de las cuales amplios sectores sociales se habían reconocido entre sí en el ciclo político que se intentaba cerrar, comenzó a nombrar de otra manera a los diversos actores sociales y políticos. De tal modo, condicionaba a los individuos a adoptar una posición en la recepción de los mensajes de una forma que sus enunciados adquiriesen mayor verosimilitud. No se recibe de la misma manera un mensaje si el individuo se ubica como su receptor en tanto miembro de un sector social, ciudadano, peronista, radical, conservador, hombre del mercado, consumidor o padre de familia.

Del ordenamiento a la cosecha conservadora

El objetivo compartido dentro de las fuerzas armadas en 1976 fue cerrar un ciclo histórico mediante la redefinición profunda de las pautas de formación del poder. Él fue el foco de atracción de considerables sectores del empresariado, no sólo de los más asociados a la cúpula militar sino también de los que entrevieron la posibilidad histórica de alterar los términos de la presencia del sector asalariado y del sindicalismo en las decisiones públicas.

Sin embargo, esta convergencia se desarticulaba cuando la cuestión era definir las características del nuevo ciclo histórico que se proyectaba abrir.

⁴ Las directivas de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia al respecto fueron muy claras. Transcribimos el apartado referido a los procedimientos a que debían ajustarse los medios, de una circular que se expidió en abril de 1976. El texto nos exime de mayores comentarios: "Procedimientos: 8. Propagación de información verificada en sus fuentes y nunca de carácter sensacionalista. 9. No incursionar en terrenos que no son de debate público por su incidencia en audiencias no preparadas (no educadas) o ajenos a su edad física y mental. 10. Eliminación total de términos e imágenes obscenas, procaces, chocantes o descomedidas, apelaciones eróticas o de doble intención. 11. Erradicación del empleo de recursos efectivistas y truculencia en el uso de la palabra y la imagen. 12. Propender al uso correcto del idioma nacional. 13. Se reitera la absoluta prohibición de efectuar propaganda subliminal en todas sus formas. 14. Eliminar toda propagación masiva de la opinión directa de personas no calificadas o sin autoridad específica para expresarse sobre cuestiones de interés público. Esto incluye reportajes y/o encuestas en la vía pública. 15. No publicar ni difundir notas periodísticas pagadas de ninguna naturaleza sin que figure en forma destacada la frase "Espacio de publicidad" ni que omita la entidad o persona responsable que la solvente. Este tipo de publicidad no deberá ser incluida en primera plana o tapa de publicación. 16. No incluir publicidad ni notas pagadas dentro de los espacios periodísticos de radio, tv, cine, teatro o cualquier otro medio cultural o informativo."

Las tensiones internas que generó la definición del nuevo rumbo político a seguir fueron profundas y merecen un examen particular. En estas notas nos limitaremos a delinear las características del proyecto político neo-conservador que, durante los primeros años del gobierno militar, fue postulado por los que lograron mantenerse en la conducción política de las fuerzas armadas. En aquellos años, mucho se habló acerca de la necesidad de terminar con el péndulo que dominaba la política argentina entre gobiernos militares con poder de coacción pero sin apoyatura política y gobiernos civiles apoyados en una base consensual pero sin poder para implementar sus objetivos.

En altas esferas del gobierno, se imaginó que la salida de esta pendularidad resultaría de la constitución de una "democracia gobernada", en contraste a la "democracia gobernante", basada en la representación política de la población. Se trataba de hacer emerger una fórmula institucional que contuviera una serie de centros de decisión ejercidos por élites no dependientes de resultados electorales y que dejase un margen no decisivo para la presencia de representantes del electorado.

La operación tenía que combinar por lo menos los siguientes ingredientes:

a] La definición constitucional del nuevo lugar que debían ocupar las fuerzas armadas en el nuevo esquema institucional. Se trataba de retirar a las fuerzas armadas de un prolongado y desgastante ejercicio directo del gobierno, pero no mediante una clásica "vuelta a los cuarteles". Lo ideal era encontrar mecanismos decisivos que le permitieran una intervención de control y arbitral sobre los pasos del nuevo gobierno.

b] Efectuar una reforma de sistema de partidos políticos. Particularmente, a través de la constitución de una fuerza política o movimiento de opinión, según sean las circunstancias, de apoyo al gobierno que pudiese presentarse ante la ciudadanía como la herencia del Proceso militar. La operación suponía articular un primer anillo de dirigencia partidaria cercana, localizada por lo general en los sectores conservadores de algunas provincias, y un segundo anillo que se nutriría de eventuales fracturas de los partidos mayoritarios a través de un proceso de cooptación.

c] Desarticular y debilitar el llamado "poder sindical". En el marco del diagnóstico neoconservador del que se derivaba la necesidad de separar las corporaciones laborales del Estado y trasladar la problemática de los derechos sociales a la suerte de los mecanismos de mercado, se postuló el debilitamiento del sindicalismo a través de su fragmentación, la prohibición de formar organizaciones sindicales de tercer grado, como la CGT, y de retirar de su jurisdicción una serie de temas que transferían poder y recursos materiales a la dirigencia sindical.

d] La consumación de la mencionada operación de "rebautismo" de los argentinos, la obtención de su "cambio de mentalidad" y la legitimación de un eje político de individuación y de reconocimiento mutuo acorde con las pautas de formación del poder que se estimulaban.

Para lograr estos objetivos, el factor tiempo fue ponderado de una manera particular, lo que luego dejaría sus huellas en las características de la crisis por la que atraviesa la Argentina actual. El proceso, se dijo, no tenía tiempos sino objetivos. Las conversaciones públicas que se llevaron a cabo en el Ministerio del Interior desde 1980 con algunos sectores políticos —fundamentalmente con los que se perfilaban como candidatos a engrosar un futuro partido o movimiento que heredaba el proceso— no eran la antesala de ningún calendario electoral y en ellas, explícitamente, estaba fuera de consideración el esquema de poder vigente. Como trataremos de retomar más adelante, este intento de reducción del tiempo de las diferentes esferas de la sociedad al tiempo de la enmarañada mecánica decisoria oficial, bloquearía luego al propio gobierno la posibilidad de tomar medidas en el momento apropiado, ya sea para perpetuarse o para enayar una apertura política.⁵

La crisis de gobernabilidad del proceso de reorganización nacional

Como sabemos, el proyecto de refundación del país que acabamos de describir fracasó. Pero este desenlace asume hoy formas muy particulares que se sintetizan en dos rasgos:

1. El proceso, que en 1976 se presentó como el portador del orden frente al caos vigente, se precipitó en una profunda crisis de gobernabilidad. Es decir, fracasó en el terreno que él mismo había definido como el decisivo para recomponer la vida nacional.

2. Su crisis de gobernabilidad no obedeció a la acción de fuerzas opositoras que obraron de manera más o menos clásica, a través de movilizaciones sociales o de una activación profunda de la vida política. Pasada una primera etapa, en la cual aún era verosímil que el gobierno militar padeciera la herencia de ciertos problemas del gobierno anterior, luego, poco a poco, y desde 1980 de manera vertiginosa, fue precipitándose en la crisis enredado en los efectos mediatos e inmediatos de su propia política.

Intentaremos entonces puntualizar algunos factores que fueron alimentando tan singular agudización de la larga crisis política argentina.

⁵ La particular vivencia del tiempo en todos esos años es uno de los temas más interesantes para el análisis. El propio gobierno, desde su esquema político, decretó la eliminación del tiempo y, simultáneamente, desde su política económica, sumergió a amplios sectores sociales en el redescubrimiento del corto plazo, mediante la presión diaria de una economía especulativa, en la que ganaba el que mejor percibía la velocidad de rotación de los valores del dinero, del dólar, de las acciones, de los depósitos a plazo fijo, etcétera. Todo era cuestión de comprar y vender en el momento justo.

a) *El esquema de poder y las fuerzas políticas*

Ya hemos mencionado cómo, en 1976, las fuerzas armadas se hicieron cargo del gobierno en el contexto de una situación de guerra interna y sin incluir en el sistema institucional aliado alguno proveniente del espectro de partidos políticos articulados, en mayor o menor medida, al régimen de compromiso que tuvo vida de marzo de 1973 a marzo de 1976.

El carácter prioritario de las decisiones de la corporación militar por sobre las de cualquier otra institución de la sociedad, se expresó en la forma en que las fuerzas armadas ocuparon el aparato del Estado. Los ministerios, las gobernaciones y otras dependencias centrales fueron divididas proporcionalmente entre el ejército, la marina y la aeronáutica. A su vez, en cada uno de los escalones jerárquicos de cada una de estas instancias se procedió a una redistribución de cargos entre las tres fuerzas.

Esta red de sistemas de decisión estaba controlada por una serie de funcionarios que ocupaban cargos en los mismos pero que, sin embargo, no obedecían a la jerarquía propia de la instancia sino a sus mandos en la fuerza en la que revistaban.

Este doble juego se extendía desde dependencias menores del aparato del Estado hasta la cúpula del gobierno, donde temas como si el presidente del país debía ser o no al mismo tiempo comandante del ejército se tornaron cruciales para la evolución de toda la situación política.

El sistema decisorio estatal fue subordinado a una multiplicidad de lógicas diferentes, al depender de instancias tan heterogéneas desde el punto de vista institucional. Y, fundamentalmente, al estar referidas en última instancia a unas fuerzas armadas que si bien contaron con cúpulas que mantuvieron bajo control en los primeros años las diferencias de opinión que había en su seno, su punto de unidad se encontraba, sobre todo, en la negación de la etapa política anterior del país.

Ello afectó la implementación de las políticas públicas y, más profundamente, trabó la rearticulación del gobierno con la sociedad civil, particularmente con los partidos políticos. La subordinación de las iniciativas gubernamentales respecto de la obtención de acuerdos internos en las fuerzas armadas fue una de las vías de la distorsión de los tiempos propios de cada proceso de la sociedad. Cuando en 1980 se realizó el primer diálogo político formal entre el gobierno y algunos sectores del espectro político (comenzando por los amigos del Proceso), ya los efectos de la política económica limitaban profundamente la capacidad de cooptación del gobierno. A lo que se agregó, por parte del Ministerio del Interior, una concepción del acuerdo político que exigía el pleno apoyo de los políticos y que limitaba los márgenes de autonomía que les eran indispensables para canalizar los sectores de la población que ellos proyectaban. A medida que el Proceso perdía fuerza e iniciativa política, fue pasando a primer plano un gran contrapeso de cualquier intento gubernamental de rearticulación con las fuerzas políticas y, más aún, de una eventual apertura política. Esto es, la exigencia de las fuerzas armadas a las fuerzas políticas

de no revisar en el futuro lo actuado por ellas durante la etapa de guerra interna que sufrió el país, ya que cualquier compromiso sobre el tema es de incierto cumplimiento.

b] *La gobernabilidad de las fuerzas sociales*

La política económica implementada desde 1976 se propuso un programa de transformaciones de largo plazo cuyos dos componentes principales fueron la apertura de la economía y la liberalización del mercado de capitales. Reconstruiremos en primer lugar la evolución de las variables económicas más importantes, asociadas a los efectos de la política del ministro Martínez de Hoz.⁶ Luego, realizaremos algunas consideraciones acerca de sus implicancias políticas. En el contexto de las reglas definidas por el plan económico, el gobierno dio prioridad al objetivo antinflacionario. Los sucesivos intentos de políticas destinadas a reducir la tasa de inflación no dieron resultados satisfactorios pero en el transcurso de su aplicación tuvieron efectos importantes sobre el nivel de actividad, la balanza de pagos, los precios relativos y la distribución del ingreso. Durante el período de Martínez de Hoz, tres fueron las políticas antinflacionarias más importantes que se emplearon:

a] La política inicial de congelamiento de salarios y de su posterior mantenimiento, en términos reales, en un nivel 40% inferior al vigente en marzo de 1976. Esta política se extendió desde abril de 1976 a junio de 1977.

b] La política de contracción de la oferta monetaria aplicada en el último trimestre de 1977 y el primero de 1978, que prosiguió, aunque de modo atenuado, hasta diciembre de 1978.

c] La política de tipo de cambio futuro pautado que dio lugar a una considerable revaluación del peso, en términos de paridad. Esta política se aplicó desde diciembre de 1978 a marzo de 1981.

Las consecuencias de la aplicación de estas políticas de diferente signo, pueden ser sintetizadas en algunas observaciones principales.

El nivel de actividad económica tuvo dos ciclos. Con un primer punto de mínima en el segundo trimestre de 1976; un primer punto de máxima en el tercer trimestre de 1977; un segundo punto de mínima en el segundo trimestre de 1978, un segundo punto de máxima en el tercer trimestre de 1979 y, finalmente, un descenso sostenido hasta la actualidad.

La cuenta corriente de la balanza de pagos con el exterior tuvo superávit hasta 1978 y déficit crecientes de ahí en adelante. El endeudamiento

⁶ Seguiremos aquí la interpretación del proceso económico del período que plantean Adolfo Canitrot y Roberto Frenkel en "Políticas económicas de corto plazo, empleo y distribución del ingreso en la Argentina", mimeo., CEDES, 1981.

con el exterior subió a casi 40 mil millones de dólares corrientes entre 1976 y el momento que escribimos estas notas.

La distribución del ingreso, consecuentemente, se movió hacia un lado y hacia el otro. Sin embargo, cabe identificar algunas tendencias generales. El gran afectado por estas políticas fue el salario real. Su brusca caída inicial sólo tuvo recuperación parcial debida al retraso del tipo de cambio y su efecto negativo sobre el precio de los bienes agropecuarios exportables. Luego de 1980, retomó una línea descendente, como lo evidencia el siguiente cuadro.

Salario industrial real

1975=100

II	1976	68.1
	1979	74.8
	1980	83.9
I	1981	82.9
II		77.8
III		69.7
IV		72.2
I	1982	65.8

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los ingresos agropecuarios tuvieron un gran auge hasta 1978 pero luego descendieron con la caída del tipo de cambio. Las empresas industriales, luego de lograr grandes beneficios en 1977 y de experimentar una expansión en 1979, cayeron en un proceso de endeudamiento acelerado debido al alza de los costos financieros que las llevó a un virtual estado de quiebra generalizada. Algunos números bastan para demostrarlo.

Producto bruto interno Producto bruto industrial

	1970=100	1970=100
1979	126.2	122.1
1980	128.0	117.4
1981	120.2	98.7

FUENTE: Banco Central de la República Argentina.

La medida nuclear del plan económico, la liberalización del mercado de capitales, otorgó un lugar privilegiado al sector financiero y a sus en-

trelazamientos en los otros sectores de actividad económica, dinámica que se asoció de manera particular al funcionamiento de la banca internacional, proceso que no analizaremos en estas líneas.

Ahora bien, ¿qué implicancias tuvieron estas tendencias en los procesos de formación del poder y cuáles fueron sus formas de intervención en la singular crisis en que desembocó el gobierno?

Pese a la tendencia general descendente del salario real, los conflictos obreros durante el período de 1976 a 1981 fueron aislados y no generaron un clima de agitación social importante. Aun contando en cierto momento con una situación de bajo desempleo que, clásicamente, coloca al sector en mejores condiciones de presión y de negociación con la patronal.⁷

Tasa de desempleo

Nivel global

1975	3.3
1976	4.7
1977	3.3
1978	3.0
1979	2.1
1980	2.4
1981	4.6

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las claves explicativas de este comportamiento posiblemente se encuentren en una serie de factores, como la particularidad de la caída del gobierno de Isabel Perón, en el que tuvieron presencia directa los dirigentes sindicales, la dispersión salarial y categorial que propulsó el plan económico neoliberal, la fuerte represión sobre cuadros medios y la base del sindicalismo y, también, un paulatino achicamiento de la clase obrera como tal.

⁷ El bajo desempleo que se presentó hasta 1980 fue producto de una serie de factores: el condicionamiento de sectores militares sobre el Ministerio de Economía al respecto, los diferentes tipos de negociaciones que se fueron practicando fábrica por fábrica, el descenso de la oferta global de trabajadores (por un incremento de los jubilados pasivos, por migraciones y por un retiro de trabajadores secundarios) y, también, por una transferencia de trabajadores asalariados al sector servicios y cuenta propia. El telón de fondo fue el bajo crecimiento de la población en el país.

Obreros ocupados en la industria

1970=100	
1979	95.6
1980	88.2
1981	77.1

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Sin embargo, el movimiento obrero se mantuvo, en el pensamiento político del gobierno, como un potencial factor de amenaza de importancia. Lo cierto es que el gobierno tuvo los problemas de gobernabilidad más importantes con los sectores empresarios, es decir, con gran parte de su propia base de apoyo inicial.

Recordemos, antes que nada, que la economía cumplió una función directamente política en los años del ministro Martínez de Hoz; la discusión de la política argentina fue, en gran medida, la discusión sobre el plan económico. En esta trama, a pesar de que se puede individualizar claramente cómo el salario se vio afectado en el período y cómo pasó a ocupar un lugar dominante el sector financiero, ocurrieron procesos que complejizan el cuadro y que son de suma importancia para analizar las relaciones del gobierno con el empresario en tanto relaciones de formación del poder.

La prioridad antinflacionaria, que situó las directivas del Banco Central a partir de 1978 en el eje de la política económica, estaba asociada al imperativo de reordenamiento de la economía, una de cuyas condiciones doctrinarias era la toma de distancia respecto de cualquier presión sectorial.

A partir de ese momento, primero se afectó al sector agroexportador a raíz del tipo de cambio y, luego, al sector industrial, por la elevación de las tasas de interés que le hizo contraer una pesada deuda con el sector financiero.

Estos puntos conflictivos fracturaron la convergencia inicial con el gobierno debilitando el apoyo al mismo. Por un lado, determinados sectores comenzaron a diferenciar su apoyo al plan político del gobierno de su crítica, cada vez más virulenta, al plan económico. Y otros sectores comenzaron a redescubrir que la puesta en su "lugar" de la clase obrera anunciada en 1976 suponía también afectar una modalidad de funcionamiento del aparato económico en el que estaban comprometidos amplios sectores de la producción apoyados en el mercado interno.

Por otro lado, el mercado de capitales que impulsó la reforma financiera canalizó firmemente los recursos a la especulación y empujó a una aguda situación recesiva. De nada valieron las exhortaciones de diversos funcio-

narios civiles y militares a no incurrir en prácticas especulativas, cuando la lógica fáctica de los asuntos económicos inducía a comportamientos especulativos. A raíz, precisamente, de la función directamente política del plan económico, estos comportamientos comprometieron la capacidad de gobernabilidad de los agentes económicos que tan taxativa y verbalizadamente el Ministerio de Economía había asegurado a amigos y adversarios. La especulación pasó a convertirse en un cotidiano efecto de demostración política.

La inflación y la especulación desatadas por el ministro Rodrigo en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, funcionaron como una suerte de aspectos contextuales que ayudaban a justificar el golpe de Estado. El fenómeno de inflación y especulación producidos por el plan neoliberal tuvo un carácter más profundo, pues fue un plan de reordenamiento que se propuso explícitamente afectar las coordenadas sociales que estaban en la base de los procesos de formación del poder característicos del ciclo populista. Se podría conjeturar que se pasó del desorden de los precios al desorden de las prácticas de los agentes económicos, por lo menos desde el ángulo de la percepción de amplios sectores.

c] *La ambivalencia ante el sindicalismo*

La desarticulación del poder sindical estuvo en el centro de la mira de la receta neoconservadora. Las relaciones entre el Estado y los sindicatos, teñidas de la temática de los derechos sociales, fueron consideradas como la causa de una serie de distorsiones económicas (precios políticos, emisión inflacionaria de moneda, etcétera), y como el germen del desorden social y político. El diagnóstico, en realidad, describía procesos que tenían más que ver con la debilidad del sistema de partidos argentinos para constituirse desde las fuerzas sociales para ser un importante factor de mediación de sus aspiraciones, que con los atributos supuestamente intrínsecos de los mecanismos de concertación social que, en realidad, en su origen cumplieron funciones estabilizantes del dinamismo del país. Cuando estos mecanismos fallaron parcialmente o estimularon una desbordante activación social, no cambiaron su naturaleza de dispositivos de control. Por ello, su erradicación desde 1976 generó una suerte de crisis de segundo grado que, quizás, privó al gobierno de una serie de recursos de gobierno. Este fue, desde el punto de vista social, un verdadero salto al vacío.

A pesar de las características del comportamiento del sector asalariado que hemos descrito, la posibilidad de un estallido social fue siempre temida y, a raíz de la crisis de segundo grado generada, un factor realimentador de la permanente incertidumbre del gobierno en este terreno.

Además, la función del sindicalismo argentino en la formación del poder político hizo que sectores militares —aun los que pudiesen estar de acuerdo con la descripción neoconservadora de la larga crisis— nunca dejaron de evaluar el sindicalismo como un eventual aliado en futuros conflictos en

la cúpula del poder. Si a esto agregamos que los interventores militares en los sindicatos tendieron a incorporarse en la lógica del funcionamiento del aparato del sindicato, llegando incluso a compartir algunos de sus intereses frente al gobierno del que, en realidad, eran delegados, completamos un panorama singular. Por su ubicación histórica de hecho en el funcionamiento institucional del país y por la legitimidad de su existencia, fundada en los derechos de los trabajadores, el sindicalismo, aún debilitado, se mantuvo como un referente de la vida política argentina. Y el 30 de marzo de 1982, una poco ortodoxa convocatoria de la CGT en el centro de Buenos Aires hizo transparente el aislamiento y el *impasse* a que había llegado el gobierno.

d] *El vacío cultural*

Los dispositivos de resocialización, de creación de nuevos sistemas de reconocimiento entre los sectores sociales y políticos, aunque no dejaron de tener sus efectos fallaron en sus objetivos más profundos. El discurso oficial siempre tuvo como elemento de articulación interna la referencia al caos imperante en 1976. La mención al pasado constituyó una verdadera lucha por la memoria histórica, que si bien pudo apoyarse en la referencia a hechos como, por ejemplo, el vaciamiento de poder del gobierno de Isabel Perón, nunca pudo constituirse sobre la base del proyecto de futuro que contenía. A medida que pasó el tiempo y el gobierno se fue enredando en los efectos de sus propias políticas, el discurso oficial fue recibido más débilmente y pasó a ser un aporte más al vaciamiento de la palabra pública en la Argentina.

El mercado no generó el "cambio de mentalidad" esperado y se agotó en la realimentación de la cultura de la especulación. Los medios de comunicación, lejos de la omnipotencia de las circulares que los regulaban en su funcionamiento, de la espectacularidad de su alcance cuantitativo y de las fantasías que despertaba el manejo de sofisticados medios técnicos sufrieron la metabolización de sus mensajes en el marco de las prácticas de la cultura popular. Por cierto, repetimos, no han dejado de surtir efectos, pero ellos están más asociados a la estimulación de la anomia y la desmovilización por medio del ataque a las identidades sociales anteriores de los individuos, que por la obtención de nuevas pautas de individuación política.

Estos son algunos de los aspectos que caracterizan la lógica de la singular crisis del gobierno del Proceso hasta los primeros meses de 1982. Su denominador común es que todos, en lo fundamental, derivaron de las propias medidas del gobierno, todos se situaron en el terreno que él iba definiendo. Por cierto, comenzaron a surgir nuevas voces desde algunos sectores de los partidos políticos, de la Iglesia, de la cultura y del sindicalismo. La importancia de esto es relevante si pensamos en las alternativas futuras que tiene el país, pero en el análisis de la génesis de la crisis

del gobierno no alteran nuestra afirmación acerca de la no presencia de una fuerte y activa oposición que hubiera sido el factor desencadenante de su fracaso.

De diagnosticador a diagnosticado

La forma en que se gestó la crisis del Proceso acentuó su densidad ante una población que sentía que, prácticamente, no había intervenido en los acontecimientos o, por lo menos, que lo que había hecho no guardaba relación con la gravedad de la situación. Hacia fines del período presidido por el general Videla, en 1980, los indicadores económicos exigían al ministro de Economía un ciclópeo esfuerzo retórico para explicar lo que estaba pasando como parte de un plan de largo plazo que tenía un final feliz garantizado. El resultado de los esfuerzos del Ministerio del Interior para ir conformando la fuerza política de apoyo al gobierno, no fue más exitoso. Los diálogos ensayados con sectores de la dirigencia política no pasaron de inoperantes gestos de aproximación política, con cartas demasiado marcadas.

La sociedad "enferma" de 1976 comenzaba a elaborar las más diversas explicaciones de lo que pasaba y a colocarse, insensiblemente, en el rol del diagnosticador.

El fugaz gobierno del general Viola, que sucedió al de Videla, desplazó el foco de atención política hacia el bloque de partidos mayoritarios, abandonando de hecho la prioridad de sus predecesores: que el Proceso tuviese su propia herencia política. Se comenzó entonces una incierta negociación con la cúpula de los partidos, generalmente mediante conversaciones informales. No obstante, rápidamente, los primeros signos de tímida apertura fueron disolviéndose por la presión de la pinza formada, por un lado, por la tarea de desestabilización de los sectores financieros, que sentían que estaban perdiendo el control de la situación, a raíz de las más que cautelosas medidas de rectificación del rumbo tomadas por el nuevo ministro de Economía y, por otro lado, por las señales enviadas desde dentro de la corporación militar en el sentido de que el presidente debía subordinarse al esquema de poder. Mensaje que, más que decir esta casi obviedad, también connotaba que todo lo que el presidente pactara estaría pendiente de la aprobación de un sistema decisorio que parecía orientado a buscar otras soluciones, particularmente en la figura del comandante en jefe del ejército, el general Galtieri.

El presidente Viola, a diferencia de su predecesor, no tuvo las espaldas cubiertas en el frente militar y sufrió una inesperada enfermedad física que aceleró los tiempos para las posibles iniciativas de los que, en las fuer-

zas armadas, pensaban que el Proceso aún tenía algún objetivo propio que cumplir.

El general Galtieri, al convertirse en el nuevo presidente, trató de fortalecer la figura presidencial y mantuvo su cargo en el ejército, volvió a poner en manos del neoliberalismo a la política económica y buscó un acercamiento con la administración del gobierno Reagan y con sectores del Pentágono, en Estados Unidos.

La situación no había dado muestra de mejoría durante el verano de 1982 y la movilización de la CGT del 30 de marzo puso al desnudo la orfandad política del gobierno.

Fue más que eso, también evidenció las falencias de la oposición para transformar la crisis del gobierno en fuerza propia. Los partidos políticos, recién salidos a la superficie luego de largos años de prohibición de las actividades políticas, trataban de ubicarse con cautela frente a las iniciativas de la corporación sindical, reactualizando las complicadas relaciones entre estos dos universos de la vida social y política argentina. Por su parte, la misma convocatoria sindical fue lanzada por la dirigencia sin saber con seguridad lo que iba a pasar, exhortando a manifestarse contra la política social del gobierno no a través de articuladas relaciones de práctica sindical con las bases sino, fundamentalmente, a modo de llamamiento general.

La nueva situación que había abierto la convocatoria de la CGT no había alcanzado a clarificarse cuando, a las 48 horas, se produjo la toma de las Islas Malvinas.

Durante la extensión de la guerra del Atlántico Sur, en la política interna se condensaron diversos problemas. En el justo reclamo por la soberanía nacional argentina sobre las islas, se entrecruzaron diversas lógicas políticas.

Desde la cúpula del gobierno se creó un inesperado hecho consumado, que tenía como condición de posibilidad de su éxito la neutralidad o pasividad de Estados Unidos. Para ello el general Galtieri había realizado una tarea de aproximación con mandos del ejército norteamericano y había asumido una política de firme respaldo y colaboración con la política norteamericana en Centroamérica.

Cualquier desenlace que significase no volver a la situación territorial previa al 2 de abril, era valorado como un éxito que, con todo lo parcial que pudiese ser, permitiría al gobierno retomar la iniciativa política interna; en el caso del presidente, ubicado en condiciones que hiciese viable su perpetuación sobre la base de un acuerdo con las fuerzas políticas. Y, desde el punto de vista institucional, permitiría que las fuerzas armadas se recuperaran del desgaste sufrido y que ensayasen una operación transformista mediante la cooptación de parte de la dirigencia política, lo cual le permitiría ubicarse en un lugar institucional más cualitativo y condicionante de la gestión de un gobierno posiblemente más abierto a los civiles cooptados.

Para seguir en el plano de las conjeturas, no faltarían, por supuesto,

otras ideas en la corporación militar, más bien influida por el nacionalismo de derecha, que tendrían la expectativa de una lisa y llana perpetuación en el poder.

Sin embargo, la sorpresa del grupo dirigente que creó el hecho consumado fue doble. Por un lado, Estados Unidos respaldó la actitud guerrera del viejo colonialismo inglés en función de sus acuerdos geopolíticos mundiales. Para el gobierno norteamericano lo más importante era el papel de Inglaterra en Europa en la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, particularmente en lo referido a los misiles intercontinentales. El grupo de Galtieri había entrado en otro tablero, regido por otras reglas y habitado por fuerzas inconmensurablemente superiores a las argentinas, que vieron con muy poca simpatía una iniciativa de la periferia que podía trasgredir los delicados equilibrios de la política mundial.

Por otro lado, la recuperación de las Malvinas ubicó al gobierno dentro de un repertorio temático propio de los sectores populares y nacionales, en el cual el argumento liberal conservador quedó atrapado sin poder desplegar un juego discursivo propio. Por su parte, el general Galtieri hizo la experiencia de hablar en una concentración masiva en la histórica Plaza de Mayo en la que recibió muy discriminados aplausos y silbidos, según se refiriera a la soberanía nacional o al gobierno, respectivamente. Estas incomodidades discursivas fueron temporariamente compensadas por una descomunal manipulación de los medios de comunicación, particularmente de la televisión.

Entre otras cosas, la guerra fue demostrando la incompatibilidad entre la soberanía nacional y los efectos del plan económico neoconservador, su mercado de capitales había dejado devastado el aparato productivo y el achicamiento económico y social del país fue claramente percibido como incompatible con una política de defensa territorial. Como señalamos al comienzo de estas notas, las tensiones que incubaban en su seno la convergencia militar-neoconservadora de 1976, salieron a la superficie de la escena política.

Por varias semanas, el "nosotros" territorial significó para los argentinos la actualización de históricas demandas nacionales y, al mismo tiempo, una suerte de nosotros compensador de la ausencia de territorios institucionales comunes, en medio de la profunda fragmentación que venía impulsando la crisis.

La derrota en la guerra interiorizó en las fuerzas armadas una profunda crisis, que hoy llega, en sus debates internos, a la radicalidad del cuestionamiento de su misma profesionalidad.⁸

⁸ El carácter reciente de los hechos hace imposible referirnos a dos componentes centrales de la guerra. El del comportamiento de la dirigencia en las negociaciones diplomáticas y el de los aspectos específicamente técnicos de los enfrentamientos armados. Por lo menos en la primera etapa de la posguerra, la prioridad informativa y las posibilidades de debate al respecto la tienen los protagonistas más directamente involucrados en los acontecimientos.

La Argentina post-Malvinas y los temas de la democratización

La guerra del Atlántico Sur añadió un rasgo más a la singularidad de la crisis del Proceso. Hasta el 2 de abril de 1982 el gobierno se debatió con los efectos de sus propias medidas en el plano económico-social y con su fracaso en la creación de una fuerza política civil. Desde la toma de las islas, tuvo que vérselas con la lógica propia que fue asumiendo su hecho consumado. Por cierto, durante el transcurso de la guerra, la inexistencia de instituciones democráticas impidió un intercambio de opiniones y una matizada reflexión colectiva sobre los acontecimientos que se sucedían. La altísima autonomía decisoria con que se movió la cúpula gubernamental y la manipulación de la información marcaron, en lo fundamental, los límites de la gran participación popular que tuvo lugar en defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, el hecho consumado fue cruzado por diversas lógicas políticas porque, en realidad, movilizaba una temática propia de los sectores populares que históricamente se habían constituido en la Argentina teniendo como referentes identificatorios principales la cuestión social y la cuestión nacional. El gobierno había salido de sus principios de articulación originarios de 1976. Por ello, cuando la cúpula gubernamental se vio sorprendida por la reacción de Inglaterra y de Estados Unidos y los medios de comunicación oficiales comenzaron a repetir la pregunta: ¿Qué es lo que hemos aprendido respecto de quién son nuestros verdaderos amigos?, gran parte de la población podía contestar cómodamente: “Lo que ya sabíamos”.

Esto se torna muy visible si comparamos este intento de vinculación política con la población con la manera en que se planteó el mismo problema durante el primer tramo del Proceso, cuando no se trataba tanto de ampliar el consenso del gobierno como de transformar los actores sociales y políticos. El mismo ritual del acto en Plaza de Mayo en el que habló el general Galtieri —muy criticado por la prensa de tendencia liberal-conservadora— no alcanzó a ser el punto de partida de un nuevo tipo de liderazgo militar y quedó en el plano de la comunicación analógica, tan presente en la cultura popular. No podía sino evocar otros actos, con otros oradores, en otras épocas.⁹

Tanto por haber quedado enredado en sus propias medidas de gobierno como por la multiplicidad de lógicas políticas que atravesaron el hecho consumado de reintegrar militarmente las islas al territorio nacional, la crisis en que desembocó el Proceso asume un porte singular.

No obstante, así como no fue necesaria una significativa acción política de la sociedad civil para desencadenarla, sí lo es para dar un curso democrático a su resolución. La coyuntura argentina actual presenta una serie

⁹ Por ello, la consigna quizás más significativa escuchada ese día no provino del repertorio directamente político de la concurrencia, sino surgió de una analogía con el fútbol: “Y ya lo ve, y ya lo ve, de locales otra vez”.

de acontecimientos difícilmente ubicables en tendencias sociales y políticas subyacentes a los mismos, sujetas a ciertas regularidades, propias de una situación estructurada. Es una situación tan crítica que hace muy difícil cualquier previsión; ella presenta múltiples posibilidades.

En esta coyuntura el factor tiempo es fundamental y, de no trasladarse gradualmente el curso de la democratización a las iniciativas de la sociedad civil —particularmente a los partidos—, las tendencias autoritarias pueden recomponer cierta iniciativa y la acción desestabilizante de los intereses económicos —que sólo pueden acceder a resortes decisivos estatales de la mano de un golpe de Estado—, puede hacer sentir sus efectos. Estas circunstancias plantean una serie de cuestiones que queremos puntualizar brevemente ahora, cambiando, quizás, el tipo y nivel de análisis que desarrollamos hasta aquí.

I. La resolución de la crisis mediante la constitución de un régimen democrático depende de todo un proceso de formación de sus protagonistas, particularmente de la remodelación y fortalecimiento del sistema de partidos políticos.

Una de las coordenadas principales de la larga crisis política argentina es el problema de las relaciones entre los movimientos sociales y el sistema institucional político. Desde la década de 1940 hasta comienzos de la de 1970 el movimiento social, particularmente el movimiento obrero, planteó —tanto a la derecha como a la izquierda— la complicada cuestión de la ubicación institucional del peronismo. La gran activación social de la primera parte de la década del setenta fue un problema para el propio Perón, que volvió apoyado en una gran oleada social con la que entabló una tensa relación dual.

Por un lado, frente al gobierno militar de entonces asumió las demandas obreras y populares presentándolas como una continuidad actualizada de la tradición renovadora del peronismo histórico y, por otro lado, fue proponiendo un proyecto propio de gobierno. Pero mientras la tradición peronista se asentaba más en la temática de los derechos sociales que en los valores de la democracia representativa, Perón volvió a la Argentina con la idea de generar una “democracia integrada” que resolviera la crisis del Estado, y no con la de impulsar un fuerte distribucionismo económico.

El proyecto del último Perón contenía el más significativo intento de rearticular los sistemas de reconocimiento originarios del peronismo en un eje político de individualización que tendía al reconocimiento del sistema político representativo como un “bien de autoridad”, cualitativamente diferente y prioritario respecto del resto de los bienes demandados en la movilización social que lo trajo al país.

Las dificultades de gobernabilidad de Perón sobre su propia base de apoyo y la posterior crisis del gobierno de Isabel Perón, crearon condiciones para el entusiasmo con que ciertos sectores, particularmente del empresariado, recibieron la perspectiva de recomposición de un orden social favorable a sus intereses sobre la base de la coacción disciplinadora

y la de la transferencia de la conflictiva problemática de los derechos sociales a las supuestas leyes objetivas del mercado.

El fracaso del Proceso replantea el problema de la institucionalización del país y, con él, el de las características del sistema de los partidos políticos argentinos. Nacidos en estrecha vinculación con el Estado, los partidos siempre tuvieron dificultades para combinar sus dos funciones principales: la de la representación de intereses y la de gobernabilidad de la sociedad. El propio peronismo nunca pudo estructurarse como un partido significativo y toda su fuerza política quedó depositada en las posibilidades que le brindó su carácter de Movimiento.

Las relaciones entre gobernabilidad y representación de la sociedad son de por sí complejas y hoy existen por lo menos tres grandes fórmulas que se presentan como depositarias de la resolución institucional de los problemas que ellas contienen:

a) la propuesta neoconservadora postula la necesidad de equilibrar el proceso de formación de poder mediante la formación de una significativa corriente partidaria de centroderecha.

En la medida en que esta propuesta suponga el génesis de una derecha civilizada, que deje de convertirse en el componente civil de los golpes militares y que acepte la regla sucesoria de los gobiernos propia de un régimen democrático, posiblemente cuente con la simpatía del resto de partidos. Sus inconvenientes son, principalmente, las limitaciones que le imponen los intereses sociales que representa y su carácter de proyecto que no pudo concretarse, aun teniendo las amplias facilidades que le brindaron los primeros años del Proceso.

b) La institucionalización mediante el acuerdo de cúpulas civiles y militares. En largos años de activación social y de ausencia de articulaciones partidarias orgánicas de amplios sectores populares, se fue formando todo un estilo de acción política, un tipo de partido político, podría decirse, temeroso de que sus funciones de representación de intereses anulase su eventual capacidad de gobernabilidad del espacio social.

Estas prácticas se apoyan en dos temas ampliamente justificados por la historia contemporánea de la Argentina. Por un lado, que el eventual nuevo régimen representativo no sea desestabilizado ni por la derecha tradicionalmente golpista ni por un desborde social sin capacidad de generar una sólida alternativa política; y, por otro lado, que las fuerzas armadas se replieguen a los cuarteles sintiendo que la democracia no es sinónimo de su derrota y que de lo que se trata es de esperar el rápido desgaste del gobierno civil para volver a ocupar de facto el poder.

Sin embargo, estas dos certezas generan, en realidad, un tipo de partido que despliega una fina astucia para los acuerdos informales, pero que es incapaz de asumir iniciativas que transfieran a la práctica política de los ciudadanos la garantía de la gobernabilidad democrática del país.

De tal modo, estos sectores de la dirigencia política marchan por un estrecho camino, flanqueado, a un lado, por diversas solicitudes y ope-

raciones de cooptación gubernamental y, a otro lado, por las expectativas y las demandas de las capas sociales en las que se apoyaron históricamente para existir como partidos. Trayecto que hoy se hace mucho más complejo, luego de la muerte de dos grandes líderes de los partidos populares mayoritarios: Perón y Balbín.

c] El acceso de los sectores populares a la ciudadanía política a través de una democracia participativa. En este caso, nos referimos a una perspectiva común a diversos sectores de partidos políticos y de amplias franjas de la población sin inscripción partidaria. Sus obstáculos son, principalmente, dos componentes presentes en las experiencias políticas troncales de los sectores populares: el clientelismo político y el corporativismo.

II. Ahora bien, la salida progresiva de la crisis necesita la creación de un nuevo espacio de intercambio político, de negociación y de transacción entre los eventuales integrantes del pacto democrático. Esto es, de una red institucional con atributos antisísmicos frente a los eventuales intentos de desestabilización, y con capacidad de expresar los intereses sociales mayoritarios sin poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas. Nos referimos a una casi utópica nueva institucionalidad, apta para la negociación de bienes de diferente naturaleza: salarios, ocupación, inversiones y, también, lealtades políticas, consenso y formas institucionales.

En el caso argentino, este espacio institucional no estaría integrado por actores ya constituidos esencialmente, que sólo se modificarían en los grados de poder y de fuerza que ejercerían en cada coyuntura. Hoy, la democratización de Argentina no se plantea, como en otros momentos de su propia historia y de la de otros países occidentales, a través de la incorporación de diversas parcelas de la población (mujeres, menores, extranjeros, etc.) a un régimen de representación política en cierto sentido preexistente. En nuestro caso, el acceso a la ciudadanía política de la población asumiría la forma de un proceso de formación de actores políticos con capacidad de generar y de estabilizar a un régimen virtual.

Las frecuentes interrupciones del curso constitucional de la vida nacional y la influencia del argumento neoconservador, que postula que la democracia política no contiene recursos aptos para la gobernabilidad de la sociedad, replantean el problema, incluso el interrogante más radical acerca de qué es "hacer política", luego de las diversas intervenciones sectoriales que sostuvieron profundas pero inestables redefiniciones del espacio de la vida pública y de la vida privada de los argentinos.

El nuevo tipo de ciudadanía política que exige la democracia participativa sólo puede realizarse si su terreno de gestación principal —aunque no único— son las formas políticas en que históricamente se vincularon los sectores populares a los sistemas decisorios políticos, esto es, el radicalismo y el peronismo. Pero también contiene un aspecto de discontinuidad respecto de estas experiencias, uno de cuyos componentes imprescindibles es

la progresiva disolución de la cultura política clientelística y corporativista.

Todo pacto político democrático pone en funcionamiento una suerte de doble lógica. Por una parte, la del cálculo del intercambio de los diversos bienes entre los distintos sectores sociales. Por otra, la de la interiorización subjetiva de determinado "bien de autoridad". Esto es, de las reglas comunes que deben regular el intercambio de esos bienes.

La combinación de ambos elementos en el plano de la regulación social replantea hoy el tema de la concertación social. Terreno que aparece con nuevos problemas y bajo la forma de reconstitución de un tejido de poder en el marco de la crisis de segundo grado instaurada por el plan neoconservador. Temas como la inflación, la desocupación y la deuda externa complejizan las reivindicaciones populares, lejos ya de su posible síntesis en el reclamo de aumentos nominales de salario o de una actitud de desentendimiento respecto del funcionamiento global de la economía, propia de las visiones corporativistas que consideran las reivindicaciones obreras como una suerte de variable independiente del resto de problemas de la sociedad; actitud que suele obtener como respuesta, más tarde o más temprano, la activación inflacionaria que hace caer el salario real.

En el plano directamente político, el reconocimiento de las reglas democráticas como un bien de autoridad remite al tema de la relación entre la acción política y la cultura política. Esto compromete un nivel cognitivo elemental en la Argentina de hoy: comprender las alteraciones producidas en las características del país en los últimos años. Poder problematizar el diagnóstico y las propuestas pertinentes para las dimensiones sociales de la democracia por la salud, la escuela, los medios de comunicación, etc., a partir de conocimientos específicos y no de la repetición de esquemas preconcebidos, propios de otras épocas. Y también compromete el plano de la identidad institucional de los diferentes actores de la política, incluidas las de las fuerzas armadas necesarias para la democracia y el desarrollo nacional autónomo.

La democracia participativa supone la aceptación, por parte de los diferentes sectores sociales, de ciertas instituciones y leyes como marco legítimo de resolución de sus conflictos. Pone a prueba la capacidad de evaluar el bien común o de grupo como un bien diferente, en tanto concierne a las identidades políticas y sociales, que no son una dimensión calculable como las otras.